EL ESTADO LAICO, DESDE LA MIRADA DE LA SOCIEDAD CIVIL

El Foro Intereclesiástico Mexicano y el Estado laico

Lic. Jesús López Lobato⁹

Uno

En el marco de consolidación del Estado laico en México, el FIM participó, además de otras organizaciones de la sociedad civil; en la planeación y realización del Seminario Internacional: Estado Laico, Democracia y Libertades. Pese a los obstáculos presentados, el Foro Intereclesiástico Mexicano asumió el reto que implica abanderar la defensa y fortalecimiento del carácter laico del Estado.

Quienes participamos en la construcción de lo que hoy es objeto de esta memoria, afirmamos categóricamente su éxito. Desde los distintos frentes en los que desarrollamos nuestras actividades en pro de su salvaguarda, sumamos esfuerzos, vinculamos capacidades, movimos voluntades, superamos las dificultades y fuimos capaces como es el hecho que lo somos, de construir y asentar un precedente en la defensa y fortalecimiento del Estado laico mexicano.

Dos

El Foro Intereclesiástico Mexicano y el Estado Laico

La defensa y consolidación de los elementos que hacen posible el carácter laico del Estado mexicano son una de nuestras principales preocupaciones y ocupaciones. Muestra de ello, son todos aquellos artículos que en nuestros Estatutos disponen y nos previenen cumplir esa línea y frente de acción¹⁰.

9 Titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Foro Intereclesiástico Mexicano (FIM); cotitular de la Vocalía “Diversidad Religiosa y Creencias” de la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación. Profesor-Investigador de la Universidad Sámman de Jalisco. Profesor e Investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho del Centro Universitario de Educación Superior H. P. (CUESHP).

10 Estos principios y acciones han sido ampliamente propuestos en los diversos escenarios donde el FIM ha tenido participación (Congreso de la Unión, Congresos locales, universidades, medios de comunicación, entre otros).

Elsa Conde Rodríguez, Martha Tagle Martínez, Rosario Ortiz Magallón y Dr. Roberto J. Blancarte

Toda nuestra normatividad se ve atravesada por los elementos, valores y principios que hacen viable esta forma de concebir la comunidad política; este modelo de convivencia que no impone o exige para ingresar en él y utilizar sus estructuras, ningún tipo de preferencia o pertenencia, antes, reconoce las diferencias, ve en la pluralidad una fortaleza, y más que fragmentar al laos¹¹ e incomunicar creando ínsulas¹² a partir de privilegios; afianza las referencias comunes a todos a partir del reconocimiento y sometimiento de las personas a la ética que lo sostiene; es decir, a aquél catálogo de derechos y libertades fundamentales conquistados no de forma espontánea, sino a través de luchas encarnizadas contra aquellos que ven en este tipo de Estado un obstáculo para sus planes hierocráticos.¹³

El Estado laico es el espacio idóneo en el que se pueden vivir y disfrutar las diferencias; es el terreno común en el que la convivencia social deviene sin más ataduras que las contenidas y reconocidas en aquel conjunto de facultades y libertades fundamentales que son patrimonio común de la Humanidad, mismas, que una vez conquistadas no se puede; ni moral ni éticamente abandonarlas, ni deben jurídicamente ser renunciadas por sus titulares ya que lo uno u lo otro causa menoscabo a la dignidad humana; "... son principios básicos fundamentales y esenciales para que el hombre viva con la dignidad que le corresponde como ser humano."¹⁴

El Foro Intereclesiástico Mexicano por sus Estatutos y por la convicción de quienes lo integran; lucha por la defensa de estos principios básicos fundamentales y con mayor énfasis por los derechos y libertades en materia religiosa. En el marco de aquellas conquistas acepta, sólo por citar un ejemplo: que la libertad de culto en una sociedad laica como la nuestra esta reconocida como uno de los derechos humanos básicos y garantizada también por nuestra Carta Magna¹⁵. Libertad conquistada no sin pocas dificultades teniendo como contexto global las luchas liberales de los siglos XVIII y XIX cuyos protagonistas fueron el laicismo¹⁶ vs. el clericalismo; el primero buscando la separación Iglesia-Estado; el segundo reclamando los privilegios del confesionalismo e imponiéndolos a la República.

11 El término griego laos designa la unidad de una población, considerada como un todo indivisible. PENA-RUIZ, Henri. 2002. La Laicidad, México. Siglo Veintiuno Editores.

12 [Ínsula] Don Quijote llama así al país cuyo gobierno promete a Sancho Panza, que él imagina como una isla. MOLINER, María. 2006. Diccionario de Uso del Español. Madrid. Gredos.

13 El planteamiento hierocrático se consolidó durante el siglo XI con el Papa Gregorio VII, y alcanzó su máxima expresión con la Bula Unam Sanctam del Papa Bonifacio VIII (1302). Esta doctrina [Hierocracia] se apoya en la superioridad del poder espiritual sobre el temporal y lleva a someter el poder de los príncipes a la jurisdicción de la iglesia, en la medida en que compete a la potestad eclesiástica juzgar los pecados y absolverlos. La competencia por razón del pecado, que obviamente compete a la iglesia, fue entendida en el sentido de que ésta podía asumir el análisis de los actos de gobierno que pudieran considerarse injustos, proponiendo la solución justa de los problemas políticos. PRIETO, Vicente. 2005. Relaciones Iglesia-Estado La perspectiva del Derecho Canónico. Salamanca. Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca.

14 HERRERA, Ortiz, Margarita. 2003. Manual de Derechos Humanos. México, Porrúa.

15 Artículo 24. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 2007. México. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

16 Históricamente el laicismo ha sido la respuesta crítica al clericalismo, que genera intolerancia hacia las creencias y las instituciones de la fe distinta. MONSIVÁIS, Carlos. 2008. El Estado Laico y sus Malquerientes. México. Debate/Universidad Nacional Autónoma de México.

El Estado laico, antes que marginar, excluir o privilegiar a algún segmento de la población, por el contrario los une; es más, como lo expresa claramente Catherine Kintzler: “Es cierto que una república laica no profesa ni el ateísmo, ni la no creencia, ni el agnosticismo, así como tampoco profesa ninguna religión. Dice simplemente que no es necesario profesar nada, que esto no es necesario, que la asociación política no tiene necesidad de profesión de fe.”¹⁷

En el prólogo del libro *La Laicidad* del filósofo francés Henri Pena-Ruiz nos dice: “Hay hombres que creen en un Dios. Otros, en varios. Otros, en fin, son ateos. Sin embargo, todos han de convivir”.¹⁸ Creyentes o no creyentes, ateos o agnósticos, todos, tienen un lugar en igualdad de derechos en el Estado laico, desde el cual pueden elevar sus peticiones al poder público y éste atenderlas sin mediar privilegios o cualquier pretexto que se pueda invocar como motivo causando violencia al principio de no discriminación; contrario a lo que sucede en un Estado de tipo confesional en el que se prefiere a una religión o una creencia en detrimento de los que no profesan o creen de la misma manera.

A modo de conclusión parcial, afirmamos: el Foro Intereclesiástico Mexicano, define como agenda principal en este campo de acción la defensa y consolidación de aquel espacio que nos permite convivir a todos sin detrimento de nuestros Derechos Fundamentales.

Tres Nuestra preocupación

Conocemos el alcance de aquellos que se oponen en la actualidad, al avance y consolidación del Estado laico en nuestro país; identificamos los instrumentos utilizados para corromper un proyecto que inició y se enraizó en nuestro México desde el siglo XIX. En su generalidad, nuestra atención se ubica en defender aquellas metas alcanzadas por los liberales mexicanos; tal como lo narra Carlos Monsiváis: “El Estado laico [mexicano], de modo obvio, atraviesa por varias etapas, a partir de las metas explícitas de sus primeros impulsores: la libertad de cultos y de expresión, la separación de la Iglesia y el Estado, la educación fuera del ámbito confesional.”¹⁹

17 KINTZLER, Catherine. 2005. *Tolerancia y Laicismo*. Buenos Aires. Del Signo.

18 Y esta vida en común, desde la primera Declaración de los Derechos del Hombre, tiene que asegurar a todos la libertad de conciencia y la igualdad de derechos. Éste es, al menos, el sentido de un contrato fundador que tiende a garantizar el marco de un estado de derecho. La libertad de conciencia excluye cualquier obligación religiosa o ideológica. La igualdad de derechos es incompatible con una valorización que privilegia una creencia o al ateísmo. El poder público, entidad común a todos, como bien lo dice el latín *res publica*, será entonces neutro desde un punto de vista confesional: neuter, otra vez en latín, significa exactamente ni uno ni otro. Esta neutralidad confesional es a la vez garantía de imparcialidad y condición para que cada uno, cualquiera que sea su convicción espiritual (humanismo ateo o humanismo religioso, por ejemplo), pueda reconocerse en esta república, o ciudad, en la que todos los miembros se encuentran en pie de igualdad. PENA-RUIZ, Henry. *La Laicidad*. Op. cit. p. 9.

19 “Y la legislación de los liberales va transformando las mentalidades a partir de su victoria militar y política. Si las leyes de Reforma se dejan ver como formulación más bien utópica, en el sentido de inaplicable, se impone una idea: sin laicidad y sin laicismo el país no dispondrá de sentido histórico o, como se diría ahora, de viabilidad”. MONSIVÁIS, Carlos. *El Estado Laico y sus Malquerientes*. Op. cit. p. 301.

Elsa Conde Rodríguez, Martha Tagle Martínez, Rosario Ortiz Magallón y Dr. Roberto J. Blancarte

Contra los logros históricos del Estado laico mexicano se dirigen aquellos que a toda costa quieren recuperar privilegios mal habidos; alcanzados a través de los procesos de conquista, despojo, encomiendas y manipulación de la conciencia de las personas que habitaban estas tierras antes que ellos llegaran con su proyecto “civilizatorio”. Su lucha no ha concluido y hoy por hoy han ampliado su pliego petitorio como claramente lo desenmascara el Ing. García de la Mora²⁰: “Algunas de las pretensiones que la Iglesia católica mexicana trata de reivindicar, en miras de recuperar sus antiguos privilegios, son las siguientes:

1. Proponer que el Estado provea educación religiosa en las escuelas públicas.
2. Poseer y controlar directamente medios de comunicación electrónicos.
3. Subvención a los ministros de culto por parte del gobierno.
4. Oficializar la injerencia del clero en el ejército, mediante el reconocimiento de las llamadas capellanías militares.
5. La injerencia de los sacerdotes en asuntos políticos, incluyendo el poder ser votados, para acceder a puestos de elección popular
6. Monopolizar la asistencia religiosa en hospitales, asilos, reclusorios y orfelinatos”.

El principal adversario del ideal laico es el Estado confesional, hablar de Estado confesional es referirse al: “...estado que adopta como propia una determinada religión y concede privilegios a la jerarquía o a los creyentes de ésta respecto de los creyentes de otras religiones y de los no creyentes”.²¹

El ideal confesional se activa a través de sus principales operadores; jerarquías eclesiásticas²² y políticos apadrinados por ellas; quienes despliegan sus tácticas de asalto al poder público por medio de planes hilvanados desde el clericalismo que por su propia naturaleza lleva en sus entrañas tanto elementos de intolerancia como de discriminación hacia todo aquel que no piense, acepte y se someta a sus disposiciones.

Los liberales mexicanos del siglo XIX se enfrentan a los elementos monopólicos y luego hegemónicos de la jerarquía católica que en alianza con los conservadores llevan su oferta

20 GARCÍA, De La Mora Humberto. 27 de noviembre de 2008. Estado Laico y Libertad Religiosa. Ponencia dictada en el Foro Internacional “Estado laico en el siglo XXI, retos y oportunidades” en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

21 LÓPEZ LOBATO, Jesús, Contextos del Estado Laico y la No Discriminación Religiosa; Ponencia presentada en el XXII Congreso de Religión, Sociedad y Política; en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán; 10 noviembre 2008.

22 “Las jerarquías eclesiásticas –ninguna, nunca- no tienen derecho a convertirse en una especie de tribunal general de última instancia que decida lo que es moral o inmoral en la sociedad, lo que debe ser legal o lo que ha de ser prohibido, quién es digno de gobernar y quien debe ser éticamente repudiado. Las autoridades religiosas no son autoridades morales ni legales: pueden establecer lo que es pecado para sus feligreses, no lo que ha de ser delito para todos los ciudadanos ni indecente para el común del público. SAVATER, Fernando. 2007. Diccionario del ciudadano sin miedo a saber. Barcelona. Ariel.

de salvación del espacio particular y colectivo al espacio público, afectando aun la vida constitucional del nascente Estado mexicano. En este orden de ideas, Humberto García de la Mora comenta: “Las páginas de nuestra historia refieren que fue la Iglesia católica la que se negó a permitir, durante siglos, una auténtica libertad de creencias en México, donde, bajo su influjo, las constituciones de Apatzingán y la liberal de 1824 establecían al catolicismo como religión oficial, “sin tolerancia de ninguna otra”. Y en 1857, cuando se fijó el carácter laico del Estado, la Iglesia católica excomulgó a todo aquel que jurara la Nueva Carta Magna.”²³

Frente a esta amenaza específica, al FIM le preocupa que se instaure a través de la influencia clerical y del oportunismo de la ultraderecha, un régimen intolerante y discriminatorio para quienes no se alineen o alienen²⁴ al proyecto clerical. El Doctor Blancarte, estudioso del fenómeno religioso comenta: “En el caso de México, como en el de la mayoría de los países de tradición latina, la presencia de una Iglesia [católica romana] con el monopolio de la salvación y, posteriormente, con una hegemonía casi absoluta en el terreno religioso, llevó a una situación discriminatoria, incluso jurídica, que sólo se comenzaría a eliminar con la gestación de un nuevo Estado que fundaría su soberanía en el pueblo y ya no en alguna forma de poder sagrado o religioso.”²⁵

En México, el clericalismo desde siempre ha sido blandido por la jerarquía católica contra todo lo que no comparta sus propósitos; “...es fundamental distinguir por un lado, la función que el clero católico ejerce a través de la administración de la economía de la salvación a los fieles católicos, y por otro, de sus pretensiones y acciones para apropiarse del poder político imponiéndolo a todos. Ya que el clericalismo no se determina exclusivamente por el cumplimiento de sus responsabilidades eclesíásticas dentro del terreno religioso-católico, sino por la avaricia de poder temporal sobre la comunidad política.”²⁶

Al respecto, el Doctor Henri Pena-Ruiz al abordar la noción de clericalismo expone: “La religión, como creencia que une libremente a los fieles, no puede ni debe ser confundida con el clericalismo, ambición totalmente temporal de dominación que se encarna concretamente en la captación del poder público. Así definido, el clericalismo va mucho más allá de la autoridad legítima de un clero que se mantiene dentro de los límites de una comunidad de fieles y no pretende imponer su ley a los otros.”²⁷

Este es el itinerario de nuestra atención, estos asuntos abordamos con la conciencia y la visión objetiva del impacto que tienen y tendrán en el devenir de la historia de nuestra patria.

23 GARCÍA, De La Mora Humberto. Estado Laico y Libertad Religiosa. Op. cit.

24 Alienar; Transformar la conciencia de un individuo o colectividad de modo que pierda su propia identidad. MOLINER, María. Diccionario de Uso del Español;... Op. Cit. p.133.

25 BLANCARTE PIMENTEL, Roberto. 2008. Libertad Religiosa, Estado Laico y no Discriminación. México. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Cuadernos de la Igualdad Número 9. p. 13.

26 LÓPEZ, Lobato Jesús. Contextos del Estado Laico y la No Discriminación Religiosa. Op. cit.

27 PENA-RUIZ, Henry, La Laicidad. Op. cit. p. 22.

Cuatro Nuestra ocupación

No sólo es la presteza a las cuestiones bosquejadas líneas arriba, lo que anticipa nuestro accionar y dirige nuestra atención al monitoreo y vigilancia del curso histórico que los acontecimientos puedan tomar. Nuestro cuidado es denunciar o defender y fortalecer, según sea el caso, las violaciones al Estado laico o la consolidación del carácter laico del Estado.

A lo largo de dos años de vida institucional el FIM, a través de un sin fin de labores ha llevado su ideario, principios y objeto a diversos escenarios, exponiendo sus propuestas primeramente ante los miembros de las diversas organizaciones que conforman nuestra organización de la sociedad civil; tanto a asociaciones civiles, órganos no gubernamentales, fundaciones, asociaciones religiosas y personas físicas afines a nuestros principios. Propuestas que también se han presentado a los medios de comunicación a lo largo y ancho de la República mexicana; llevadas al Congreso de la Unión tanto a su Cámara de Senadores como a la Cámara de Diputados; exponiéndose en ambas. A la Asamblea de Legislativa del Distrito Federal. A un significativo número de congresos locales. A muchos municipios de los diversos estados que componen nuestra Federación. A las universidades públicas más importantes del país, sólo por mencionar algunas: La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); La Universidad de Guadalajara (UdeG); La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY); La Universidad Autónoma de Morelos (UAM); La Universidad Benito Juárez de Oaxaca (UABJO); La Universidad Veracruzana (UV); entre otras.

Hemos realizado talleres, foros, conferencias, mesas redondas, seminarios; llevando estas propuestas y dándolas a conocer.²⁸

Hemos realizado una participación y colaboración activa con otras organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, con quienes hemos encontrado en los elementos del Estado laico un espacio común en donde exponer nuestros puntos de vista, discutirlos y defender cada quien su ideario sin detrimento de lo que es común a todos como personas: nuestros derechos fundamentales.

El apoyo que hemos recibido y que recíprocamente hemos brindado a intelectuales, académicos, legisladoras y legisladores, a líderes sociales, a ministros de culto; para nuestro proyecto, ha sido aleccionador.

No hubiéramos llegado hasta aquí si a lo largo de todo este tiempo, no hubiéramos construido redes con todas y todos aquellos que reconociendo nuestras respectivas diferencias logramos identificar un espacio común como lo es la defensa de nuestros derechos y libertades fundamentales.

Este Seminario Internacional es una prueba contundente de lo que puede hacer y lograr la sociedad civil organizada a favor del fortalecimiento del Estado laico en nuestro país.

28 Algunas actividades curriculares del FIM, las señala Rigoberto Mata Medina en Panorama de la intolerancia y la discriminación religiosa en México. BECERRA, Gelover Alejandro (Coordinador. 2008. Atención a la discriminación en Iberoamérica. Un recuento inicial. México. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Primera Edición.

A manera de conclusión

Es nuestro propósito recordar cuales son nuestras principales propuestas:

1. Que se eleve a rango constitucional el carácter laico del Estado mexicano.
2. Que siga vigente, como hasta hoy, el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias.
3. Que se mantenga vigente la educación laica en las escuelas públicas, respetando el artículo tercero constitucional en su texto actual.
4. Que se garantice la libertad religiosa y de creencias, dentro del marco actual del Estado laico.
5. Que continúe la prohibición expresa para los ministros de culto de no intervenir en asuntos políticos ni poder ser votados para puestos de elección popular como actualmente lo estipula la LARCP.
6. Que se tipifique en todos los códigos penales del país, el delito de discriminación en todas sus formas, incluyendo la religiosa.
7. Que se establezca en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, una sanción legal por medio de la cual se inhabilite a todo servidor público o instancia gubernamental que practique la discriminación, en todas sus modalidades, desde el ejercicio de su función.
8. Que se modifique, en la cultura de los derechos humanos y los ordenamientos jurídicos vigentes, el concepto de tolerancia por el de respeto a partir del reconocimiento pleno.
9. Que se modifique el procedimiento del Censo que hará el INEGI en el 2010, dado que consideramos que el anterior (el de 2000), fue discriminatorio hacia las asociaciones religiosas no católicas.
10. Que las legislaciones estatales establezcan los mecanismos legales necesarios para que se sancione ejemplarmente a las empresas que para poder emplear a sus trabajadores, utilicen criterios religiosos discriminatorios.
11. Que se establezca una Subsecretaría de Asuntos Religiosos en todos los estados del país, conformada por un equipo plural, multidisciplinario y ciudadano; y que sea ésta la encargada de vigilar y denunciar a las instancias correspondientes todo tipo de abusos en esta materia.
12. Que el dinero del erario público del Gobierno (Federal, Estatal y Municipal), no pueda ser utilizado para fines de proselitismo religioso de ninguna índole. La asistencia social que el gobierno está obligado a proporcionar a la población, deberá

Elsa Conde Rodríguez, Martha Tagle Martínez, Rosario Ortiz Magallón y Dr. Roberto J. Blancarte

ser canalizada a través de sus propias instancias y no a través de asociación religiosa alguna, en concordancia con el carácter laico del Estado. Al funcionario público que incurra en faltas de este tipo, no sólo se le debe sancionar ejemplarmente (sin excluir el juicio político), sino inhabilitar para el ejercicio de su encargo, sin derecho a participar en la función pública por un periodo de tres años, a partir de la sanción establecida.

13. Que siendo el ejército una institución estatal al servicio de todos los mexicanos (as), éste debe actuar en consonancia con la laicidad de las instituciones, por lo que nos oponemos a su participación en actos político-religiosos y al reconocimiento de las llamadas capellanías militares.
14. Que se promuevan foros y mesas de discusión a nivel nacional donde se aborde la temática referente a la eliminación de los prejuicios aún existentes hacia los grupos religiosos minoritarios, así como el respeto a la pluralidad religiosa en nuestro país.

Como organismo de la sociedad civil, el FIM propone contribuir a la defensa, fortalecimiento, consolidación y perfeccionamiento del Estado laico desde la responsabilidad de todas y todos.

Garantía de derechos integrales para las mujeres en el marco de un Estado laico

Católicas por el Derecho a Decidir

María Consuelo Mejía Piñeros

La pregunta en torno al por qué la laicidad del Estado debe ser incluida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el Dr. Roberto Blancarte aborda en el primer capítulo, adquiere matices y motivos de especial trascendencia cuando hablamos desde la perspectiva de los derechos de las mujeres.

Dado que las mujeres siguen siendo uno de los sectores más vulnerables y vulnerados en nuestra sociedad, se hace necesario explicitar de qué manera el actual marco jurídico y social de la laicidad del Estado, resulta deficiente e ineficaz para garantizar los derechos fundamentales de las mujeres y abona a la permisividad y hasta legitimación de la violación de esos derechos, haciendo que en lo cotidiano veamos cerrarse las puertas de la justicia, del respeto a nuestra dignidad, del acceso a una vida plena, libre de pobreza, exclusión, violencia y discriminación.

En este sentido, consideramos apropiado reflexionar brevemente sobre las razones de hecho y las razones de derecho, por las cuales se hace necesario incluir en el texto constitucional la afirmación de la laicidad del Estado Mexicano.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos si bien salvaguarda la libertad de conciencia, de creencias y de cultos, sólo afirma la laicidad del Estado en su artículo 3º, al referirse específicamente a la educación. Es en una ley secundaria, la de Asociaciones Religiosas y Culto Público, donde se afirma explícitamente que “el Estado mexicano es laico” (Art. 3º), reduciendo dicho carácter casi exclusivamente a la separación/relación entre el Estado y las Iglesias.

Sumado a esto, y valiéndose de las lagunas que nuestras leyes tienen respecto de la laicidad, está su permanente vulneración, por un lado de parte del gobierno al apoyar abiertamente la agenda moral, social y política de la jerarquía católica; y por otro, de parte de dicha jerarquía al apoyar abierta, pública y políticamente las pretensiones gubernamentales de legitimarse a través de aquella, o de principios religiosos cristianos que, como hemos visto, vulneran los más elementales derechos y garantías individuales de las mujeres.

En un contexto de crecientes intentos hegemónicos por parte de representantes de la Iglesia católica y de sectores sociales y políticos ultra-conservadores, el Estado laico es imprescindible para proteger los derechos humanos de las mujeres, de manera que los fortalezca y no se admita ninguna imposición que los vulnere.

Razones de *jure*: Un marco jurídico en proceso de consolidación

La existencia del Estado laico es una exigencia de las sociedades modernas y democráticas. Ante la creciente diversidad religiosa y moral en el seno de las sociedades actuales, los Estados tienen el importante desafío de favorecer la convivencia armoniosa, la necesidad de respetar la pluralidad de las convicciones religiosas, ateas, agnósticas, filosóficas y la obligación de favorecer, por diversos medios, la deliberación democrática y pacífica.

La laicidad es fundamental para la vida democrática. Impregna inevitablemente lo político y lo jurídico, acompañando de esa manera el avance de la democracia, el reconocimiento de los derechos fundamentales y la aceptación social y política del pluralismo.

Para garantizar la igualdad y las libertades de la ciudadanía, el orden político debe tener libertad para elaborar normas colectivas sin que alguna religión o convicción particular ejerza presión ni domine el poder civil y las instituciones públicas.

Es así que, el respeto concreto a la libertad de conciencia y a la no discriminación, así como la autonomía de lo político y de la sociedad frente a normas particulares, deben aplicarse a los necesarios debates que conciernen a las cuestiones relacionadas con el cuerpo y la sexualidad, la enfermedad y la muerte, la investigación científica y la bioética, la emancipación de las mujeres, la educación de los niños, la condición de los adeptos de minorías religiosas y de otro tipo, así como de los no-creyentes.

El principio de la laicidad debe ser en consecuencia rector en los debates en torno a diferentes cuestiones que ponen en juego la representación de la identidad nacional, las reglas de salud pública, los conflictos posibles entre la ley civil, las representaciones morales particulares y la libertad de decisión individual, en el marco del principio de compatibilidad de las libertades.

En este contexto, el derecho a la salud de las mujeres, como parte de sus derechos humanos, debe también interpretarse en consonancia con los instrumentos internacionales en la materia, que el Estado mexicano ha suscrito; de manera particular la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés)²⁹, así como las Plataformas de Acción de El Cairo (1994) y Beijing (1995); “con el objetivo de mejorar las condiciones para el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, confiriéndole especial atención a la dignificación de una maternidad sin riesgos, saludable, elegida y feliz”.³⁰

El derecho a la salud y su relación con otros derechos igualmente relevantes, interactúa con el derecho a la vida, a la dignidad, a la autonomía, a la libertad, al libre desarrollo de

29 Que en su Artículo 3º obliga a los Estados parte a tomar “en todas las esferas y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”.

30 MEJÍA, María Consuelo. 2007. “Estado laico y derechos de las mujeres”, en Rosario Ortiz Magallón (Comp.), Estado laico, condición de ciudadanía para las mujeres. México. Grupo Parlamentario del PRD en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. p. 106.

la personalidad, a la información, a la no discriminación, a la igualdad, la intimidad, la privacidad y con el derecho a vivir libre de tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Una interpretación completa del derecho a la salud parte de entender su vinculación con el bienestar, el proyecto de vida, las determinantes sociales de la salud, la laicidad del Estado, y los derechos sexuales y reproductivos.

Por ello, las autoridades, incluso quienes proveen servicios de salud, deben basar sus decisiones en el respeto a la pluralidad de creencias que fundamenta la existencia de Estados laicos, en los cuales no es posible impedir el acceso de las mujeres a la interrupción o continuación del embarazo basándose en creencias religiosas³¹; ya que los discursos ligados a una fe religiosa que tienen como propósito impedir o disuadir a las mujeres de una interrupción legal de embarazo, constituyen una coerción moral, que vulnera la autonomía y los derechos humanos de las mujeres.

El Estado laico, en este sentido, busca equilibrar el respeto de las decisiones privadas y personales con la garantía de los derechos de todas y todos. De aquí se desprende la libertad de decisión sobre el propio cuerpo y el derecho a decidir en todas las esferas de la vida privada: el dominio corporal es un principio de libertad sin el cual son imposibles el ejercicio de la ciudadanía y la democracia.

El fortalecimiento del carácter constitucional del Estado laico, y su traducción en reformas legislativas en los niveles federal y estatal, se convierte así en la condición imprescindible para la protección de estos derechos y para el pleno ejercicio de la ciudadanía de las mujeres.

Razones de facto: un marco jurídico vulnerable y vulnerado

Pero, si bien hemos avanzado en su definición conceptual y su comprensión social, no así en cuanto a su explicitación jurídica; lo cual pone en jaque el respeto a todas las garantías individuales y sociales antes mencionadas, en especial las que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Claro ejemplo de ello ha sido la intervención de la jerarquía católica en las políticas públicas para intentar imponer una agenda moral y política que atenta contra la dignidad y la libertad de conciencia de los individuos, pues pretende negar la autonomía de las mujeres y su consecuente capacidad de decidir sobre su maternidad, sobre su cuerpo y su desarrollo personal y profesional.

De igual manera, cuando sus intentos por imponer sus dogmas en la comunidad política fracasan, promueve la discriminación e intolerancia, e incluso la agresión contra mujeres, legisladores e instituciones civiles que apoyan leyes dirigidas a garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas; práctica inquisitorial que no es nueva para la jerarquía católica, habiéndose distinguido desde siglos por condenar la sexualidad,

31 La CEDAW en el Inciso c), Párrafo 31 de la Recomendación General 24, recomienda enmendarse la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se sometan a abortos.

Elsa Conde Rodríguez, Martha Tagle Martínez, Rosario Ortiz Magallón y Dr. Roberto J. Blancarte

construir e intentar imponer en este campo una moral rigorista, y convirtiendo a la mujer en el objeto de culpabilidad de dicha moral, con lo que ha podido justificar su discriminación y la vulneración de sus derechos fundamentales en la sociedad y en las iglesias.³²

En un Estado laico, esta “tesis tradicional defendida por la Iglesia y la teología oficiales, de que en lo fundamental la sociedad tiene que venir definida por la Iglesia, ya no es sostenible”³³ ni aceptable.

Mientras la sociedad en su mayoría se pronuncia por el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y sexualidad, e importantes avances legislativos se obtienen en este campo, instituciones religiosas y públicas se oponen o desacatan dichas medidas, en un afán irracional por mantener la influencia de una moral específica y perteneciente a un reducido sector de la sociedad (que no es representativo ni de la mayoría de los mexicanos, ni de las mayorías católicas).

En México las violaciones al carácter laico del Estado se han convertido en una expresión reiterativa también a través de la abierta oposición de la jerarquía católica a:

- políticas públicas y programas que promueven el uso del condón para prevenir la expansión del VIH/SIDA;
- educación sexual integral que permita prevenir abusos sexuales, otras infecciones de transmisión sexual y el embarazo no deseado;
- servicios integrales de salud reproductiva para todas y todos que incluyan el acceso a toda la gama de métodos anticonceptivos para hombres y mujeres
- disponibilidad de servicios de interrupción del embarazo en los casos establecidos por la ley

Pero éste no es el único campo en el que son violados los derechos de las mujeres y de toda la ciudadanía, por parte de la jerarquía católica y los sectores conservadores. La vulneración de la dignidad humana por parte de las iglesias se da también en lo laboral, educativo, fiscal y electoral, valiéndose no sólo de la ausencia de penas específicas a los delitos que cometen las Asociaciones Religiosas y de la falta de claridad respecto de los deberes civiles de dichas asociaciones; sino también de los privilegios de que ellas y algunos de sus ministros gozan de parte del Estado.

Puesto que la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (y su Reglamento) establecen que el Estado no puede intervenir en las disposiciones internas de asociación religiosa alguna, se permite la violación impune de los derechos humanos de sus integrantes, especialmente de mujeres, niñas y niños, por parte de los ministros de culto, que se expresa en explotación laboral, exclusión y discriminación, agresión verbal, física y sexual.

Lo mismo ocurre en las instituciones educativas de índole privada y religiosa, dándose además el encubrimiento y la complicidad de sus directivos, así como de las autoridades civiles, con la consecuente criminalización de las víctimas.

32 Cf. Uta Ranke-Heinemann, *Eunucos por el reino de los cielos. Iglesia católica y sexualidad*, Trotta, Madrid, 2005, pp. 297-309.

33 KÜNG, Küng. 2002. *La mujer en el cristianismo*. Madrid. Trotta. p. 109.

Finalmente, no podemos dejar de mencionar la permanente vulneración del Estado laico y los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, que la jerarquía católica realiza en lo electoral, donde por las mismas razones que en los casos anteriores, se permite a ministros de culto hacer proselitismo político sin que haya ninguna consecuencia penal ni sanción de ningún tipo.

Tras estas breves reflexiones, podemos vislumbrar con mayor claridad los importantes retos que tenemos para salvaguardar y consolidar la laicidad del Estado mexicano sobre todo en lo concerniente a una definitiva y eficaz separación entre el Estado y las iglesias, al respeto a la autonomía de los individuos en el terreno de lo moral, y a la superación del particular intervencionismo católico (y religioso en general) en las políticas públicas que intentan asegurar los derechos sexuales y reproductivos de la ciudadanía, y en especial los de las mujeres.

Para que el poder político no abrace ni privilegie a determinada religión y se garantice que ninguna religión se apodere del Estado e imponga sus reglas, dogmas o principios morales en las políticas públicas, es indispensable impulsar reformas constitucionales y legislativas tendientes a introducir el concepto de la laicidad del Estado en el texto de nuestra Carta Magna y, consecuentemente, armonizar el resto del cuerpo legislativo federal y estatal para garantizar su cumplimiento, estableciendo incluso mecanismos de sanción a los funcionarios y funcionarias, así como a las asociaciones religiosas y sus ministros que violen esta legislación.

Para las mujeres, este avance democrático que quiere elevar a rango constitucional la laicidad del Estado es de particular relevancia, pues pondría a tono nuestra legislación en el ámbito federal y local con los convenios internacionales y demás instrumentos de derechos humanos firmados por México en materia de equidad de género, derechos y no discriminación; y permitiría a las mujeres ejercer su sexualidad de manera libre y saludable, y tener una vida personal, familiar y profesional libre de discriminación y violencia.